

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO DE SUSTANCIACIÓN:	891
RADICACIÓN:	11001-33-35-027-2019-00081-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	WALTER CAMILO VILLAMIL PÁEZ
DEMANDADA:	NACIÓN-RAMAJUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ASUNTO:	Corrección auto y requerimiento prueba

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

El apoderado de la parte demandante, mediante escrito enviado por correo electrónico el 12 de octubre de 2022 (fls. 331 a 334), planteó las siguientes situaciones y solicitudes:

1. Que se le permita el acceso al *link* del expediente digital, particularmente a la copia del correo electrónico y sus archivos adjuntos que envió el 22 de agosto de 2022 al Comité de Convivencia Laboral de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas, con el cual dio cumplimiento a la orden impartida en el auto No. 510 del 17 de agosto de 2022, pues adujo que por un error secretarial se requirió la copia del expediente por acoso laboral promovido por el señor Walter Camilo Villamil Páez contra el señor Ariel Lozano Gaitán que se inició por la queja No. 36218 del 31 de julio de 2022, cuando el año de radicación de ésta corresponde a 2018, motivo por el cual deprecó que se investigue internamente a los funcionarios del juzgado para establecer si coadyuvaron a la dilación en la recolección de dicha prueba documental.

2. Que no es justo ni tolerable que hayan transcurrido 621 días desde cuando se decretó la consabida prueba documental y aún no se haya recaudado, pues considera que la actitud negligente y dilatoria de los miembros del Comité de Convivencia Laboral de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas para acatar la orden judicial impartida el 28 de enero de 2021, ya que están obstaculizando el descubrimiento del aludido expediente por acoso laboral, constituye una vulneración a los derechos fundamentales de su poderdante y de los suyos, y un irrespeto al juez como director del proceso y a las garantías de los usuarios de la administración de justicia, razón por la cual impetró la compulsación de copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que los investiguen y sancionen, si a ello hubiere lugar.

3. Que las pruebas documentales incorporadas regularmente al proceso dan cuenta que el Comité de Convivencia Laboral de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas, presidido por el Dr. John Alexander Castellanos Gómez, sí conoció y tramitó la queja No. 36218 del 31 de julio de 2018 que su representado interpuso por el acoso laboral perpetuado por su nominador, Dr. Ariel Lozano Gaitán, motivo por el cual deprecó que se tenga como demostrado tal hecho y se le otorguen los efectos procesales que correspondan a la obstrucción de la parte demandada.

En efecto, en cuanto al primer pedimento, se observa en el numeral primero del auto de sustanciación No. 510 del 17 de agosto de 2022, que se indicó equívocamente que la queja No. 36218, presentada por el señor Walter Camilo Villamil Páez contra el Dr. Ariel Lozano Gaitán, se había formulado el 31 de julio de 2022, siendo realmente el año 2018, desacierto que indujo en error a la secretaria del juzgado cuando libró la respectiva comunicación, de modo que el yerro del cual se duele el mandatario de la parte demandante no es imputable

a dicha funcionaria sino al despacho, pues el oficio No. 170 del 20 de agosto de 2022 que envió el 22 de ese mes y año (fls. 324 y 325), como acto de comunicación que es, se limitó a transcribir fielmente la orden impartida en tal proveído, y en ese orden la incriminación que le hace en su escrito deviene infundada, irreflexiva e insidiosa, unido a que el adocenado lenguaje usado no corresponde al respeto, decoro y consideración que debe observarse en el trato entre los sujetos procesales y los servidores judiciales, razón por la cual se exhortará al Dr. Andrés Bravo Mancipe para que se abstenga de emplear expresiones injuriosas en sus escritos, tal como se lo impone el artículo 78, numeral 4, del CGP.

En cuanto al segundo pedimento, es evidente la dilación que se ha presentado en el acopio de la consabida prueba documental, y el despacho lo admite autocriticamente, pues en el auto de sustanciación 510 del 17 de agosto de 2022 (fl. 322) se reconoció que su recaudo no se había instruido adecuadamente, ya que los requerimientos hechos con anterioridad no se dirigieron con precisión a los miembros del Comité de Convivencia Laboral de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas que actuaron en el año 2018, período en el cual se radicó la queja por acoso laboral que dio origen al expediente solicitado, sino a quienes fungieron como tal en los años posteriores, por lo que se dispuso enmendar tal desacierto y se pidió al presidente de ese organismo la identificación de sus integrantes en el período 2017-2019 para que suministraran dicha información, sólo que se incurrió en la errata explicada en el apartado inmediatamente anterior, de modo que sería ligero concluir que los signatarios de los oficios en los cuales se informó la inexistencia de la referida queja incurrieron en una conducta reprochable por el código penal y el código disciplinario y que por ello deben compulsarse copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que los investiguen y sancionen, si fuere el caso.

No obstante, se vislumbra el desgüeño administrativo del consabido Comité de Convivencia Laboral, pues por lo visto hasta ahora, al parecer sus miembros responden por la actividad que desarrollan durante su mandato bienal, e ignoran o se desentienden de la actuación de sus antecesores, pese a ser un organismo que, por su trascendencia y relevancia laboral, amerita que sea dotada de una estructura administrativa permanente que al menos asegure la existencia, organización, custodia y consulta de un archivo documental en el cual repose la memoria histórica de su quehacer institucional, circunstancia que ha dificultado en grado sumo conocer el destino de la prueba documental requerida en forma reiterada.

Ahora bien, el artículo 286 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, prevé que toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto, reglas que también se aplican a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la parte resolutive o influyan en ella; y como el error advertido en líneas atrás cumple estos presupuestos será corregido en este proveído y, subsiguientemente, se hará el requerimiento adecuadamente.

Teniendo en cuenta que la persona que fungió como presidente del Comité de Convivencia Laboral en el año 2018 fue el Dr. John Alexander Castellanos Gómez, y los demás miembros corresponden al Dr. Armando Segrera Sequea y a la Dra. Paola Pulido, y como secretaria ofició la Dra. Adriana Milena Rico, se requerirá a la Dra. Johanna Aydee Salgado Martínez, presidenta actual de dicho organismo (fl. 326), y a la Dra. Lineth María Artuz Suárez, Coordinadora de Bienestar y SGSST de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca (fl. 327), para que en el término de tres (3) días, contado a partir del día siguiente al recibo de la respectiva comunicación, reenvíen este requerimiento a dichas personas y rindan el informe de tal gestión o, en su defecto, remitan en el mismo lapso a este juzgado el correo electrónico institucional o personal y el número de contacto telefónico de cada uno de ellos y, una vez recibidos, se les requerirá a éstos para que en el término de tres (3) días, contado a partir del día siguiente al recibo de la respectiva comunicación, aporten copia íntegra del expediente por acoso laboral iniciado por el señor Walter Camilo Villamil Páez contra el Dr. Ariel Lozano Gaitán o, en su lugar, informen la dependencia y el lugar en los cuales reposa tal documentación y el funcionario encargado de su custodia, administración y manejo, advirtiéndoles a todos que su desacato

a estas órdenes judiciales podrían dar lugar a las sanciones previstas en el artículo 44, numeral 3, del CGP.

Adicionalmente, tal como lo sugiere el apoderado de la parte demandante, en los eventos de que continúe la renuencia de los servidores requeridos y por esa circunstancia se prescinda de la prueba documental en cuestión, en la oportunidad procesal adecuada se valorarán los documentos incorporados al expediente y se calificará la conducta procesal de la parte demandada y, de ser el caso, se deducirán indicios de ella, tal como lo prevé el artículo 280 del CGP, aplicable por reenvío del artículo 306 del CPACA.

Finalmente, frente a la solicitud del apoderado de la parte demandante de que se le envíe el enlace para consultar el proceso digitalizado, se le informa que el expediente se formó físicamente y está disponible en la secretaría del juzgado; no obstante, una vez se libren las comunicaciones dispuestas en esta providencia, se remitirá el plenario a la Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos de Bogotá a efectos de que sea incluido en el plan de digitalización previsto por el Consejo Superior de la Judicatura y, en caso de no ser factible, se digitalizará por la secretaría del juzgado y se pondrá a disposición de las partes a la mayor brevedad posible.

Por lo expuesto, se dispone:

1. CORREGIR la expresión “*31 de julio de 2022*”, contenida en el numeral primero de la parte resolutive del auto de sustanciación No. 510 del 17 de agosto de 2022, en el sentido de indicar que la queja por acoso laboral con radicado No. 36218 presentada por el señor Walter Camilo Villamil Páez contra del Dr. Ariel Lozano Gaitán, se formuló “*el 31 de julio de 2018*”.

2. REQUERIR a los Dres. John Alexander Castellanos Gómez, Armando Segrera Sequea y Paola Pulido, presidente e integrantes del Comité de Convivencia Laboral de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas durante el período 2017-2019, y a la Dra. Adriana Milena Rico, secretaria de dicho organismo en el mismo lapso, para que en el término de tres (3) días, contado desde el día siguiente al recibo de la respectiva comunicación, envíen con destino a este proceso copia del expediente administrativo por acoso laboral promovido por el señor Walter Camilo Villamil Páez contra el Dr. Ariel Lozano Gaitán.

Para tal efecto y teniendo en cuenta que se desconocen las direcciones de las personas indicadas anteriormente, se solicitará la cooperación a la Dra. Johanna Aydee Salgado Martínez, presidenta actual del Comité de Convivencia Laboral de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas, y a la Dra. Lineth María Artuz Suárez, Coordinadora de Bienestar y SGSST de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas, para que en el término de dos (2) días, contado desde el día siguiente al recibo del respectivo oficio, reenvíen el requerimiento indicado en este apartado a los Dres. John Alexander Castellanos Gómez, Armando Segrera Sequea, Paola Pulido y Adriana Milena Rico, y rindan el informe de tal gestión o, en su defecto, remitan a este juzgado el correo electrónico institucional o personal y el número de contacto telefónico de cada uno de ellos y, una vez recibidos, requerir a éstos para que den cumplimiento a la orden impartida o, en su lugar, informen la dependencia y el lugar en los cuales reposa tal documentación y el funcionario encargado de su custodia, administración y manejo, advirtiéndoles a todos que su desacato a estas órdenes judiciales podrían dar lugar a las sanciones previstas en el artículo 44, numeral 3, del CGP. Líbrense los respectivos oficios.

3. REMITIR el expediente a la Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos de Bogotá a efectos de que sea incluido en el plan de digitalización previsto por el Consejo Superior de la Judicatura y, en caso de no ser factible por razones ajenas a este juzgado, procédase por secretaría a su digitalización y colóquese a disposición de las partes a la mayor brevedad posible.

4. EXHORTAR al Dr. Andrés Bravo Mancipe, apoderado de la parte demandante, para que se abstenga de emplear expresiones irrespetuosas en sus escritos, tal como se lo impone el artículo 78, numeral 4, del CGP.

La presente providencia será notificada en estado de acuerdo a lo establecido en el artículo 201 del CPACA, el cual podrá ser consultado en el portal de internet de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE

HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ

Juez

DSBA

Firmado Por:

Humberto Lopez Narvaez

Juez

Juzgado Administrativo

027

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 932870e58e9af823456b2ec0fd1118044458434c62f8a37854e460a85873ab55

Documento generado en 18/11/2022 11:36:52 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>